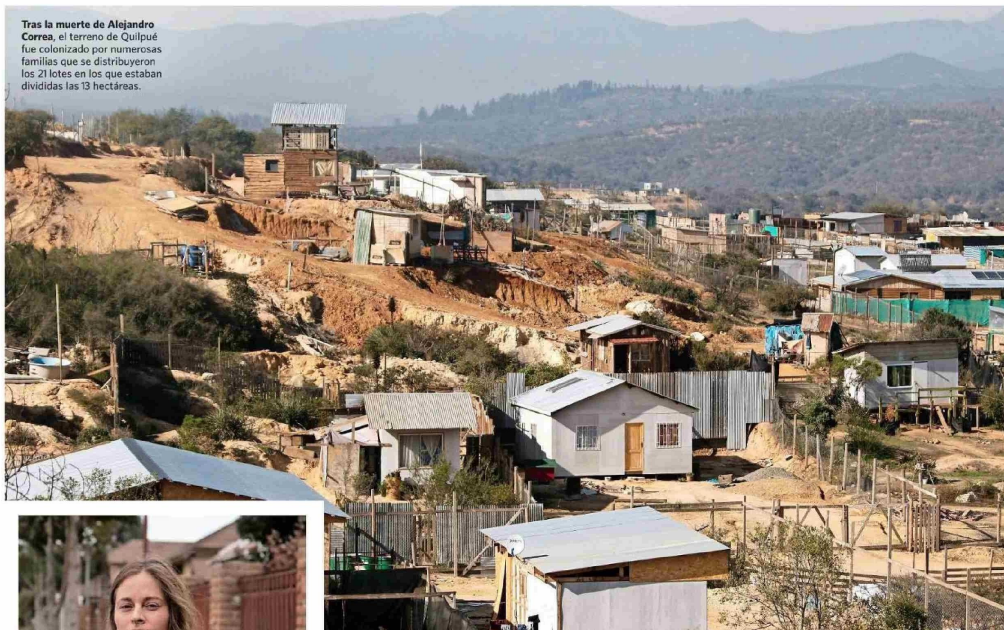


**Fecha:** 20-05-2023  
**Medio:** El Mercurio  
**Supl.:** El Mercurio - Sábado  
**Tipo:** Noticia general  
**Título:** La última batalla de VALENTINA CORREA

**Pág.:** 4  
**Cm2:** 399,0  
**VPE:** \$ 5.241.581

**Tiraje:** 126.654  
**Lectoria:** 320.543  
**Favorabilidad:** ☐ No Definida



Tras la muerte de Alejandro Correa, el terreno de Quilpué fue colonizado por numerosas familias que se distribuyeron los 21 lotes en los que estaban divididas las 13 hectáreas.



Valentina tenía 31 años cuando asesinaron a su padre.

# La última batalla de VALENTINA CORREA

Ha pasado los últimos tres años de su vida buscando justicia. Logró que el sicario y el autor intelectual del asesinato de su padre, Alejandro Correa, fuesen sentenciados a 28 y 20 años de cárcel respectivamente, y que el “asesor de tomas”, que llenó de casas el terreno por el cual lo mataron, recibiese 541 días de pena en libertad, por el delito de loteo irregular. Un proceso que ella ha definido como “justicia en todo sentido” y que hoy está en su última etapa: convertir las 13 hectáreas donde está ubicada la toma en un barrio de integración social. La idea, que ya cuenta con el respaldo de varias autoridades locales, aún depende de un trámite que nadie ha querido ejecutar: la demolición.

POR JORGE ROJAS G.

**Grabación Renato López y Luis Alarcón sobre Alejandro Correa, 7 de agosto de 2020:**  
 Renato: Oye, ese viejo c... que ha huevado po' (...). Debe estar retorciendo en la tumba ahora que está viendo las tomas. ¿Las veré?

El día en que Alejandro Correa falleció, su hija Valentina, de entonces 31 años, llegó a la casa en la que vivía en Concón y lo primero que vio sobre el escritorio, al entrar a su oficina, fue un presupuesto para cercar un terreno de 13 hectáreas que su padre tenía a un costado del Troncal Sur, en la ciudad de Quilpué. Un nombre en esas hojas llamó su atención: “Luis Alarcón, soluciones para la construcción”, decía en grande.

El documento era reciente. Correa lo había recibido un par de días antes de que un sicario le disparara afuera de su casa. Tras su muerte, Valentina declaró que el único problema que su padre tenía estaba relacionado con personas que se querían tomar aquel predio. Una noche, les dijo a los detectives, él le había hablado de uno de ellos: Luis Alarcón, el mismo del presupuesto.

—Me contó que era muy amable, muy educado, y que sabía que nosotros éramos los dueños de los terrenos. Él le había dicho a mi papá que su intención no era tomárselo, sino que quería leer más abajo, donde, según él, había un terreno fiscal —recuerda Valentina.

En ese primer encuentro, Alarcón se ofreció para cercar la propiedad con malla y quedó de enviarse una cotización. A los días hubo otra reunión, pero esta vez con topógrafos, para poner estacas en los límites. El 11 de mayo de 2020, Correa fue por tercera vez en el mes al lugar, pero las marcas ya no estaban. Hizo un video con su celular para guardar la evidencia. En el registro hay una imagen panorámica de cómo, por entonces, las casas comenzaban a levantarse en el horizonte, mientras él hablaba con un amigo sobre la necesidad de cercar pronto y pasar máquina por los caminos: “Todavía puedo parar esta cuestión, no son tantos, pero van a ir llegando muy rápido”, dice Correa en el video.

Tres días después, el 14 de mayo, puso una denuncia en la fiscalía: “Terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad, están marcando sitios y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores. El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón”. Cuando el 18 de mayo le dispararon, fue inevitable para Valentina pensar en aquella persona. La policía, sin embargo, desestimó rápidamente su participación. La detención del sicario colombiano Víctor Gutiérrez, dos días después del crimen, puso en la mira a otro sospecho: Renato López, que había instalado una “escombros” en los límites del terreno de Correa, ocupando una porción de este. Y aunque tanto Alarcón como López se conocían y tenían interés en aquella propiedad, López tenía algo más: antecedentes penales por tráfico de drogas y una acusación de parte de la familia de su exesposa, Rosa Huerta, que lo culpaba de la desaparición de su hija, ocurrida en diciembre del año 2009, sin

que hasta hoy se tenga una explicación sobre qué pasó con ella. Durante varios meses, la PDI escuchó a López hablar por teléfono para juntar pruebas que lo posicionaran como autor intelectual de un crimen que, según se determinaría en la investigación, habría comenzado a gestarse en septiembre de 2009, luego de que el empresario lo demandara en el 1.º Juzgado de Letras de Quilpué con la intención de recuperar el predio. En uno de esos llamados, López conversó con Luis Alarcón sobre las tomas. Las frases que se dijeron y las risas cómplices son parte de los detalles del caso que, a tres años del crimen, Valentina Correa no ha podido olvidar. —Son muy fuertes —describe.

**Grabación Renato López y Luis Alarcón sobre Alejandro Correa, 7 de agosto de 2020:**  
 Luis: Claro, ojálá las esté viendo.  
 Renato: No, debe estar retorciendo el pobre viejo, hueón.

La primera vez que Luis Alarcón apareció en televisión tenía 36 años. En 2006, el programa “Chile Conectado”, de TVN, lo entrevistó en su calidad de licenciado en historia para que hablara sobre los lavaderos de oro del Marga Marga, un tema que había investigado con cierta profundidad. Cuando cuatro años después los periodistas fueron sobre él, para preguntarle por qué se había tomado el terreno perteneciente a Alejandro Correa, las entrevistas no le eran ajenas. “Soy asesor de tomas”, dijo. Aquella frase determinaría su futuro.

Tras la muerte de Alejandro Correa, el terreno de Quilpué comenzó a ser colonizado por numerosas familias que se distribuyeron los 21 lotes en los que estaban divididas las 13 hectáreas. Allí, Alarcón era quien asignaba los espacios. No tenía problemas en contarles a los periodistas sus intenciones, ni en mostrar la precaria casa de dos pisos que se estaba construyendo en uno de los lotes. No está claro si la exposición pública motivó el inicio de la investigación, pero justo después de que su historia se hiciera conocida, el 23 de junio de 2020, la Fiscalía de Quilpué ordenó a la PDI investigar la denuncia por usurpación que Correa había realizado en los días previos a su muerte. Lo primero que hicieron fue interrogarlo en dos oportunidades. En ambas, Alarcón se presentó como “representante de la ocupación ilegal”.

Según su testimonio, todo había comenzado en octubre de 2009, cuando un grupo de personas que vivían en terrenos tomados en el sector del Bellano Controlado Santa Clara, justo al lado de la propiedad de Correa, lo contactaron para que los ayudara a buscar otro espacio, ante un inminente desalojo. “Entiendo que esta gente tiene una actividad económica relacionada con la crianza de animales y que por consiguiente no pueden estar en sectores urbanos, por lo que empecé a ver terrenos cercanos o adyacentes al sector, que reunieran las mismas condiciones o similares para poder hacer ocupación de estos”, declaró.

Alarcón les aseguró a los detectives que, luego de estudiar la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces y en el Servicio de

Impuestos Internos, concluyó que el fisco era el dueño de aquel lugar. Sin embargo, cuando estaban marcando los lotes se dieron cuenta de que uno de los sectores de la toma estaba sobre la propiedad de Alejandro Correa. Para entonces, ya habían metido una retroexcavadora para limpiar la vegetación y hacer los caminos internos: “Si Bienes Nacionales sindicara que tales terrenos son de propiedad de Alejandro Correa, se debería negociar para poder estar o adquirir dichos terrenos”, les dijo a los detectives.

Para comienzos de 2021, casi todo el lugar había sido ocupado. Fue entonces que Valentina Correa decidió querrelarse, mientras en paralelo la fiscalía investigaba al sicario y a Renato López por el homicidio de su padre. —Alarcón no tuvo que ver con su muerte, pero se aprovechó de eso —explica.

No fue un camino fácil. A los pocos días, Luis Alarcón solicitó una audiencia por Ley del Lobby con el diputado Diego Ibáñez, actual presidente de Convergencia Social y parlamentario por Quilpué. Lo extraño, cuenta Valentina, no fue que le aceptaran la reunión, sino que el 19 de mayo de 2021, un día después de que se cumpliera un año de la muerte de su papá, Ibáñez la llamara para ofrecerle como mediador entre las familias de la toma y ella.

—Me dijo que había tenido una reunión con “Luchito” y que quería comprar el terreno, y que él se ofrecía como una especie de mediador. Me extrañó mucho y le dije que no conocía bien a Alarcón.

Según información entregada por el entorno de Ibáñez, el objetivo de esa conversación fue mediar una solución, tal como el diputado “lo ha hecho con todos los campamentos de la ciudad”, y que el llamado a Valentina Correa habría sido para acercar posiciones con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la municipalidad. Más que reunirse con Alarcón, dijeron, se había reunido con las familias de la toma.

Un mes después de ese llamado, sin embargo, el Departamento de Desarrollo Urbano, de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, ordenó la paralización y demolición de las obras. Estableció un plazo de diez días para que los afectados pudiesen reclamar ante la justicia y le solicitó al Serviu encargarse del tema. Nada de eso ocurrió.

—No sé por qué hasta hoy nadie se ha atrevido a ejecutar esa orden —se pregunta Valentina.

Para entonces, según un catastro elaborado por el Departamento Social y Comunal de la Municipalidad de Quilpué, el



Cuatro días antes de que le dispararan, Correa puso una denuncia en la fiscalía: “Terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad, están marcando sitios y comenzando a construir (...). El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón”.

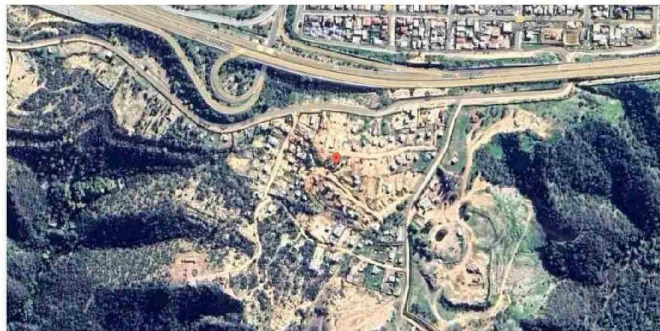
“No sé por qué hasta hoy nadie se ha atrevido a ejecutar esa orden”, dice Valentina sobre la orden de demolición.



**Fecha:** 20-05-2023  
**Medio:** El Mercurio  
**Supl.:** El Mercurio - Sábado  
**Tipo:** Noticia general  
**Título:** La última batalla de VALENTINA CORREA

**Pág.:** 5  
**cm2:** 180,2  
**VPE:** \$ 2.367.545

**Tiraje:** 126.654  
**Lectoria:** 320.543  
**Favorabilidad:** ☐ No Definida



**"Ahí yo me desilusioné bastante", dice Valentina sobre la reunión con la jefa de gabinete, Pía Castelli, en que se enteró de que no expropiarían el terreno. "El mismo informe para demoler había sido ocupado para evitar la expropiación", agrega.**

asentamiento estaba compuesto por 54 familias, que le habían puesto un nombre al lugar: "Campamento Terrazas de Marga Marga". Según el documento, durante la inspección, Alarcón nuevamente se presentó como "gestor y dirigente de la ocupación". De todas las familias, 39 residían ahí y otras 15 estaban en proceso de construcción de las casas. Ninguna pretendía irse y había otros 46 terrenos desocupados que, según dijo Alarcón ese día, estaban asignados a personas que aún no habían hecho la ocupación. En septiembre, funcionarios de la PDI llegaron a interrogarlos. Salvo matices, casi todos relataron la misma historia: que sabían que el propietario era Alejandro Correa, que Alarcón les había señalado a cada uno su lugar y que no habían pagado dinero por la propiedad. No está claro si esto último efectivamente ocurrió o si fue parte de una estrategia judicial.

Todas las familias, además, argumentaron razones económicas para tomarse los lotes: "No tenía cómo vivir, ni dónde"; "me quedé sin trabajo"; "no quería seguir pagando arriendo"; "quise independizarme"; "por la pandemia no nos alcanzaba para pagar arriendo". Uno de ellos contó que para hacerlo más democrático, pusieron los números de los lotes en una pecera y los sortearon.

Con esos antecedentes, el 22 de octubre de 2021, Luis Alarcón, quien no quiso participar en este reportaje, fue formalizado como autor del delito de usurpación y le prohibieron acercarse al lugar.

**Grabación Renato López y Luis Alarcón sobre Alejandro Correa, 7 de agosto de 2020:**

Renato: Bueno, ¿qué nombre le van a poner a la villa? Tienen que ponerle el nombre del finao po', culiao.

Luis: (risas)

Renato: (risas) No, si es broma, huecón; es broma, Luis.

A fines de diciembre de 2021, a pocos días de las elecciones presidenciales, Valentina Correa recibió un llamado desde Serviu de Valparaíso. Le preguntaron si estaba dispuesta a iniciar un proceso de expropiación del terreno y le pidieron una serie de documentos para que el equipo técnico pudiera hacer la sugerencia al nivel central. La decisión se concretó el 20 de enero del año siguiente, cuando el director regional le envió un oficio al entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, donde le solicitaba autori-

zación para adquirir el terreno. En el documento se argumentaba que esta medida estaba destinada a disminuir el déficit habitacional y que una vez que la toma fuese incorporada al Catastro Nacional de Campamentos, se haría un diagnóstico para "definir la estrategia óptima de intervención".

En pocos días, Valentina juntó todos los papeles necesarios y los envió. El 10 de marzo, sin embargo, un día antes del cambio de mando, recibió un correo en que le señalaban que no habían alcanzado a sacar una resolución, pero que el trámite sería prioridad para las nuevas autoridades. Y si, lo fue, pero no de la manera que ella esperaba. A las pocas semanas,

un funcionario entrante del nivel central la llamó para decirle que la expropiación no seguiría adelante. Por Ley del Lobby, pidió una reunión con el ministro Carlos Montes, pero solo le permitieron juntarse con su jefa de gabinete, Pía Castelli.

—Le conté toda mi historia y le dije que queríamos reanudar el trámite, pero me dijeron que no, que solo expropiaban terrenos para proyectos habitacionales y el predio de mi papá no tenía ese uso —recuerda.

Para argumentar la decisión, le adjuntaron un informe en donde se establecía que los terrenos estaban emplazados en zonas que no permitían la construcción de viviendas, debido a que gran parte de la superficie había sido considerada como un área con riesgo de "remoción en masa". Ese fue el mismo concepto ocupado en otro informe, de abril de 2021, con el que la Dirección de Obras Municipales le sugirió a la Seremi de Vivienda de Valparaíso ejercer la facultad otorgada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para demoler las casas construidas. La misma resolución que hasta hoy nadie ha querido cumplir.

—Ahí yo me desilusioné bastante. El mismo informe para demoler había sido ocupado para evitar la expropiación. Efectivamente, una parte del terreno tiene riesgo de remoción en masa, que suena terrible, pero todo Valparaíso tiene el mismo problema. No es que no se pueda construir, sino que se necesitan más informes y obras de ingeniería para hacerlo —explica Valentina.

Pue en esos meses, durante una charla, que conoció a Gonzalo Vial, director de la fundación Huella Local, dedicada a articular ciertas necesidades de equipamiento e infraestructura para los municipios.

—Empezó a leer todo de nuevo y me dijo que el proyecto tenía que interesarle a la alcaldesa de Quilpué. Pedimos una reunión por Ley del Lobby con Valeria Melipillán y ella nos dijo que la comuna tenía déficit habitacional. Nos comprometimos a cruzar esas necesidades con lo que pudiese dar el terreno.

Mientras pensaban el proyecto, recibió un mensaje privado en su cuenta de Twitter. Era de una persona que se hacía llamar "Ismael": "Hola, la verdad no me conoces. Solo quiero devolvértelo lo que es tuyo. Tengo un terreno en Camino Calichero, es uno de los más grandes, y creo que lo correcto es devolvértelo. Siento mucho lo que te sucedió".

—Hablamos por teléfono y me pidió que le asegurara que nadie más se lo iba a tomar.

La entrega no prosperó. Semanas más tarde, a mediados de noviembre de 2022, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a la familia Correa, recibió un mail de parte de Patricio Riquelme, el defensor que entonces tenía Luis Alarcón. En el correo le preguntaba si había disposición para vender el predio a los "ocupantes", pero Valentina no contestó.

—Yo puedo entender las razones de fondo, sin embargo, no es algo que tenga que resolver. He pensado en la gente que ya está instalada y luego pienso que no es la manera. Entonces, me pregunto cuál es. Y la forma es la institucional, donde se respete el Estado de Derecho. La toma no es tupida ni hacinada, son terrenos grandes, pero no tienen accesos y no hay agua, por lo que a la larga esto se va a transformar en un gueto, va a ser una reproducción de

la pobreza. Nosotros estamos preparando un proyecto que haga justicia en todo sentido: restaurativa para la familia y también para la comuna.

A fines del año pasado, Valentina y Huella Local presentaron una solicitud para darle al terreno un uso habitacional y luego enviaron el proyecto a la comisión de Ordenamiento Territorial, del Consejo Regional (Core). La propuesta incluía la construcción de un centro cívico, infraestructura comercial, un parque, un terminal de buses, un anfiteatro, un skate park, áreas verdes, estacionamientos y siete edificios, con capacidad para 400 departamentos sociales, los que estarían emplazados en las 4,5 hectáreas que no estaban en riesgo de "remoción en masa". La idea fue bien recibida por el Core, pero sugirieron que antes de avanzar en la obtención de los recursos para la compra del terreno, logran el desalojo y la demolición.

Valentina Correa no entiende cómo aquello no se ha realizado aún. Ha emplazado públicamente al ministro Carlos Montes para que ejecute la orden de la seremi, pero asegura que están evaluando la presentación de un recurso de protección. De concretarse, esta sería la tercera causa judicial desencadenada por el asesinato de su padre. A la condena de Renato López y del sicario, a 20 y 28 años respectivamente, se sumó hace un mes la de Luis Alarcón, quien fue sentenciado a 541 días de pena en libertad. Ese día, Valentina Correa tuiteó en su cuenta: "Luis Alarcón se benefició con la muerte de mi papá loteando en un 100% su terreno. Se rió de su muerte con el asesino. Hoy tenemos que aceptar esta sentencia. El terreno sigue tomado y el Gobierno puede revertirlo. Seguiremos empujando".

Esta es su última batalla. S

**Según un catastro elaborado por la Municipalidad de Quilpué, el asentamiento estaba compuesto por 54 familias, que le habían puesto un nombre al lugar: "Campamento Terrazas de Marga Marga".**